



JUZGADO DE LO SOCIAL N° 11 DE MALAGA
ADMINISTRACION DE Autos n°. 731/2018
DE JUSTICIA CONCEPTO: CANTIDAD.
Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
DON D. Óscar López Bermejo.

SENTENCIA NUM. 522/2019

En Málaga, a 2 de diciembre de 2019.

Visto por el Ilmo. Sr. D. Óscar López Bermejo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social N° 11 DE MALAGA el juicio oral y publico promovido por [REDACTED], frente a AYUNTAMIENTO DE MALAGA, en materia de CANTIDAD.

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

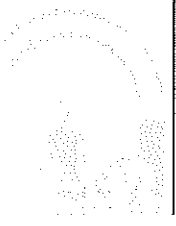
ha dictado la siguiente sentencia:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha 30.07.2018 tuvo entrada en el Decanato, turnada a este Juzgado, demanda suscrita por los demandantes frente a las demandadas, en la que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, solicitó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.

Segundo.- Que admitida a trámite la demanda se cito a las partes a los actos de conciliación y de juicio que habrían de tener lugar el día 26.11.2019 con la comparencia indicada en el encabezamiento.

Recibido el juicio a prueba, se practicaron las propuestas y admitidas con el resultado que consta en acta, elevándose las conclusiones a definitivas y quedando el juicio concluso y visto para sentencia.





HECHOS PROBADOS

Primero: [REDACTED], mayor de edad, ha venido prestando servicios para la empresa Ayuntamiento de Málaga desde el 10.07.2017, ostentando la categoría profesional de peón, y percibiendo un salario anual a 921 euros/mes, incluida prorrata de pagas extraordinarias.

Segundo: Que como consecuencia de dicha relación laboral la empresa le adeuda la suma de 9.078,49 euros, de los 8.766,15 euros es por diferencia salariales entre lo realmente percibido y las tablas salariales del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Málaga en el periodo que va agosto de 10.07.2017 al 09.07.2018, y 312,35 euros por lo que falta de indemnización por fin de contrato (ver documento nº 37 a 40 de la demandada donde fija la cantidad por euros/mes incluida p.p.e. según convenio en cada periodo reclamado).

La nómina de julio de 2017, fue percibida por el actor de forma efectiva el 27.07.2017 (documento nº 41 de la demandada).

Tercero: Resulta de aplicación el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Málaga .

Cuarto: El 10.07.2017 las partes firmaron contrato temporal por ora o servicio determinado para prestar sus servicios de peluquero, servicio subvencionado por resolución de la dirección provincial de Malaga Servicio Andaluz de Empleo, para la concesión de ayuda para la ejecución del programa de emple@30 +, finalizado el 09.07.2018.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Primero.- Los hechos declarados probados lo han sido de la valoración conjunta, conforme a las reglas de la sana crítica, de la documental propuesta y practicada por las partes concurrentes.

La parte actora pretende con su demanda a que se declare el derecho del actor a percibir sus retribuciones de acuerdo al Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Málaga y a la LPGE, y se condene a la demandada al pago de 13.359,01 euros, por diferencia salariales entre lo percibido y las tablas salariales del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Málaga en el periodo que va desde el 10.07.2017 a 09.07.2018, si bien de esta cantidad 787,45 euros proceden de los doce días de indemnización por fin de contrato temporal.



ADMINISTRACIÓN
DE

JUSTICIA

Por la demandada se opone, y alega en síntesis (consta en sistema de grabación) que la plazas son públicas para todos los que se presentaban; se les contrataba porque estaban en desempleo, y acceden a un puesto de trabajo con características especiales, por eso es para fomento de empleo y de ahí que se fije por ley su retribución. Como excepción procesal alega la prescripción del mes de julio de 2017, pues el abono efectivo de dicho mes se hizo el 27.07.2017, y la demanda de reclamación de cantidad es de 30.07.201. Subsidiariamente, en caso de estimar la reclamación, que debe ser por correcta aplicación de tablas salariales del convenio aplicable, de forma que se adeuda la cantidad total de 9.078,49 euros, de los 8.766,15 euros es por diferencia salariales entre lo realmente percibido y las tablas salariales del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Málaga en el periodo que va 01.08.2017 al 09.07.2018 (descontado julio de 2017 por prescripción), y 312,35 euros por lo que falta de indemnización por fin de contrato.

Segundo.- La cuestión objeto de debate es jurídica, y ya ha sido resuelta por este Juzgador en otro proceso (donde era otro el ayuntamiento demandado), y sobre la base del pronunciamiento emitido por la Sala de lo Social del TSJA con sede en Málaga en su sentencia nº 375/2019 de 27 de febrero de 2019, donde es un trabajador que accede también por un programa de empleo subvencionado por resolución de la dirección provincial de Málaga Servicio Andaluz de Empleo, y donde no se le aplica el convenio de personal laboral del ayuntamiento allí demandado. Así, en esta sentencia el TSJA con sede en Málaga fija en su FFDD 2º *"SEGUNDO.- Y tras ello la parte recurrente articula un último motivo de recurso, en este caso dirigido al examen crítico de las normas, que ampara procesalmente en el artículo 193.c) de la Ley de la Jurisdicción Social, y en cuyo seno denuncia incurrir la sentencia en infracción del artículo 14 de la Constitución y del artículo 19.2 de la Ley 3/2017 de PGE para 2017.*

Y lo cierto es que la censura jurídica articulada por la demandada viene indefectiblemente condenada al fracaso, no solo por el hecho de carecer la misma del más mínimo sentido y razón de ser, sino más aún por no guardar relación lógica alguna con la controversia planteada en estos autos, que atañe de manera directa al derecho de trabajadores temporales e indefinidos que desarrollan una misma actividad a percibir sus salarios en condiciones de igualdad, con plena independencia de la naturaleza del vínculo contractual formalizado por unos y otros. En nuestro caso, nos encontramos con que el actor ha venido prestando servicios laborales de jardinero para el Ayuntamiento demandado, ciertamente por mor de contrato temporal por obra o servicio determinado, pero pese a ello pocas dudas pueden racionalmente albergarse en orden a que ostenta pleno derecho a que sus condiciones salariales se rijan por el Convenio Colectivo de aplicación a todo el personal laboral del Ayuntamiento de Marbella, ya ostente la condición de trabajador fijo o temporal, evidentemente en lo que éste le sea más beneficioso que lo pactado en su contrato individual.

Tal y como reiterada jurisprudencia en la materia recuerda, "... con arreglo al art. 15.6 ET, que se acomoda en este punto a la Directiva 1999/70, por la que se aprueba el Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, los trabajadores con contratos temporales tendrán los mismos derechos que los de duración indefinida ..." - sentencia del Tribunal Supremo de 20.10.2016 -, y ello toda vez que la



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

normativa tanto nacional como comunitaria en la materia "... proscribiremos cualquier diferencia entre trabajadores fijos de plantilla y trabajadores temporales que implique un trato discriminatorio; y que en concreto se considera discriminatoria, con carácter general, toda diferencia en aquellos aspectos de la relación de trabajo en los que exista " igualdad radical e inicial entre unos y otros trabajadores"; y más específicamente, las diferencias salariales "cuando se demuestre que todos realizan un trabajo igual o similar "...", recalándose en ello que "... la prohibición de trato desigual injustificado afecta de manera especial precisamente a las Administraciones Públicas -el sector público en general, afirmamos ahora-, hasta el punto de convertirse en un auténtico deber de igualdad de trato que se basa no solamente en la prohibición de discriminación sino también en el principio de igualdad ante la ley y en la interdicción de arbitrariedad. Pues cuando la empleadora es la Administración Pública, ésta no se rige en sus relaciones jurídicas por el principio de autonomía de la voluntad, sino que debe actuar con sometimiento a la Ley y al Derecho y con interdicción de la arbitrariedad, estando sujeta al principio de igualdad ante la Ley, que concede a las personas el derecho subjetivo de alcanzar de los poderes públicos un trato igual para supuestos iguales ..." - sentencia del Tribunal Supremo de 19.09.2017 -.

Junto a lo citado, la jurisprudencia viene recalcando que el derecho de igualdad retributiva entre trabajadores fijos y temporales se basa prioritariamente en el desempeño de las concretas funciones encomendadas, y no en las formalidades contractuales empleadas, en el hecho de haberse vinculado el contrato o no a la existencia de una subvención, ni en el concreto puesto de trabajo otorgado al trabajador, reseñando en ello la sentencia del Tribunal Supremo de 14.02.2013 que no puede existir "... justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato salarial ..." entre trabajadores "... que tienen su misma categoría profesional y desempeñan idénticas funciones ...", añadiendo a ello que "... llegar a semejante conclusión equivaldría a dejar al arbitrio de una de las partes contratantes -en el caso la entidad empleadora- la efectividad del principio constitucional de igualdad, que desaparecería por completo por la simple decisión empresarial de asignar números diferentes a puestos de trabajo idénticos ...".

Por lo citado, habiendo el demandante sido contratado por el Ayuntamiento demandado para prestar funciones de jardinero, y habiendo real y efectivamente desplegado las mismas, ostenta el derecho reclamado a percibir sus salarios en las mismas condiciones previstas en el Convenio colectivo de aplicación para el resto de jardineros igualmente contratados por el mismo Ayuntamiento, con absoluta independencia del vínculo laboral -temporal o no- suscrito por unos u otros, o que el mismo se encuentre formalmente vinculado o no a una determinada subvención."

A la vista de la claridad de esta sentencia podemos resolver que el trabajador tiene derecho a una igualdad retributiva, sin que pueda sostener la desigualdad promulgada por el actor la diferencia de ser un trabajador fijo, ni la forma de contratación ni que esté sometida a subvención.

Sentado lo anterior, y estrechamente vinculado a ello, no procede condenar a las cantidades en la forma expuesta por el trabajador por los siguientes motivos, así:

1º Procede la prescripción, y el art. 59.2 ET señala "2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse". Dando por acreditado que el ente demandado hizo el pago efectivo de la nómina del mes de julio de 2017, que éste llegó al actor el



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

27.07.2017, y que la demandada tiene fecha 30.07.2018, si está prescrita esta mensualidad.

2º A la vista de las tablas salariales previstas para los años 2017 y 2018, según el convenio aplicable del ente demandado, se observa que el hecho injustificado por el actor de fijar el salario mensual en 1.968,63 euros, como lo que debió cobrar, pues conforme a los documentos 37 a 40 de la demandada son inferiores (a ellos nos remitimos). Y esta misma estructura es extensible para el calculo de la indemnización, pues parte de un importe superior del que es, a lo que se debe añadir que la parte demandada ya abono en su momento 363,36 euros, siendo por tanto 312,35 euros lo que falta por abonar como indemnización por fin de contrato.

3º.- En cuanto al interés por mora del art. 29 ET, debemos tener en cuenta el criterio fijado por la Sala IV del TS que en su sentencia nº 2785/2014 señala en su FFDD5º " Es más, a esta interpretación llevan los trabajos parlamentarios, pues si bien el Proyecto de Ley era una simple remisión al régimen del Código Civil [«El interés por mora en el pago del salario será el exigible en las obligaciones civiles»], el texto ofrecido por el dictamen de la Comisión -con mejora de los derechos de los trabajadores, al decir de la enmienda 21 de CD- ya hacía referencia a que en caso de mora en el pago del salario «el empresario deberá indemnizar al trabajador» en la cantidad que se fijase en convenio colectivo o en su caso la jurisdicción competente, «que tendrá en cuenta el importe de la remuneración, cargas familiares y causas que hubieran motivado el retraso». Pero lo cierto es que el texto definitivamente aprobado -tras la enmienda 509 del PCE- fue la de establecer la cantidad fija del diez por ciento de lo adeudado, que es la consecuencia que en la actualidad sigue vigente.

b).- Por ello, de igual modo nuestra más reciente doctrina se inclina por la aplicación flexible del interés «indemnizatorio» del Código Civil como regla general en toda clase de deudas laborales, de manera tal que el mismo se devengue siempre desde la reclamación del débito, cualquiera que éste sea y siempre que haya prosperado [bien en todo o bien en parte], en la misma forma la convicción actual de la Sala es que tratándose de concretas deudas salariales la solución ofrecida por el legislador -ex art. 29.3 ET - ha de operar también de forma objetiva, sin tener en cuenta ni la posible razonabilidad de la oposición empresarial a su pago, ni que en los concretos periodos económicos esa cifra -diez por ciento- sea superior o inferior a la inflación. Y ello es así -consideramos-, tanto porque el mandato legal se expresa de forma imperativa y sin condicionamiento alguno [«El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado»]; cuanto por el importante elemento interpretativo -ya aludido- que significan los trabajos parlamentarios previos «para desentrañar el alcance y sentido de las normas» [SSTC 108/1986, de 29/Julio, FJ 13 ; 109/1998, de 29/Mayo, FJ 2 ; 15/2000, de 20/Enero, FJ 7 ; y 90/2009, de 20/Abril , FJ 6], en los que claramente se pone de manifiesto -en este sentido, la Enmienda 21, de CD- la intención de mejorar para



ADMINISTRACIÓN
DE

JUSTICIA

Los trabajadores el régimen civil común de la mora en el incumplimiento de las obligaciones, que contemplaba un interés legal bajo que la inflación y que además se aplicaba con todas las limitaciones que ofrecía la interpretación tradicional de la regla «in illiquidis»; y muy probablemente se hizo así por atender a los valores en juego -la relevancia vital que el salario tiene para el trabajador- y por considerar que no sólo era aconsejable ofrecer seguridad jurídica, sino de alguna manera limitar controversias que pudieran comprometer el sustento del empleado."

Habiendo fijado el TS que el interés por mora debe operar de forma objetiva, siendo indiferente el éxito de la oposición de la demandada, es por lo que procede su aplicación al caso de autos sobre el importe fijado en el fallo, si bien sólo sobre los conceptos salariales, y no por la indemnización excluida en el art. 26 ET, por ser extrasalarial.

9.078,49 euros, de los 8.766,15 euros es por diferencia salariales entre lo realmente percibido y las tablas salariales del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Málaga en el periodo que va 01.08. 2017 al 09.07.2018

Vistos los preceptos legales y demás de general aplicación.

FALLO

Que estimando sustancialmente la demanda se declara el derecho del actor a percibir sus retribuciones de acuerdo al Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Málaga, y se condene a la demandada al pago de 9.078,49 euros, y a la cantidad de 8.766,15 euros se le aplicarán el 10% de intereses.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme, pues cabe Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, conforme al art 191.2 LRJS.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por SB. el Ilmo. Sr. Magistrado D. ÓSCAR LÓPEZ BERMEJO, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.